

# REVISTA DE DERECHO

AÑO XXVII — ABRIL-JUNIO DE 1959 — N° 108

DIRECTOR: **ORLANDO TAPIA SUAREZ**

## CONSEJO CONSULTIVO:

HUMBERTO ENRIQUEZ FRODDEN

ALEJANDRO VARELA SANTA MARIA

JUAN BIANCHI BIANCHI

QUINTILIANO MONSALVE JARA

MARIO CERDA MEDINA

ESTEBAN ITURRA PACHECO

**JUZGADO DEL TRABAJO DE CONCEPCION**

**ANDRES PINTO CORNEJO**  
**CON IGNACIO URETA ESPÍNEIRA**

**Indemnización por enfermedad profesional (silicosis)**

**ENFERMEDAD — ENFERMEDAD PROFESIONAL — INCAPACIDAD — INCAPACIDAD PARA EL TRABAJO — OBRERO — EMPLEADO — PATRÓN — EMPLEADOR — RESPONSABILIDAD DEL PATRÓN O EMPLEADOR — ENFERMEDAD CAUSADA DIRECTAMENTE POR LA PROFESIÓN O TRABAJO — PRESUNCION DE RESPONSABILIDAD POR ENFERMEDADES PROFESIONALES — EPOCA DE APARICION DE LA ENFERMEDAD — GRADO DE INCAPACIDAD PRODUCIDO POR LA ENFERMEDAD.**

**DOCTRINA.**— De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 258 del Código del Trabajo, la responsabilidad del patrón se extiende a las enfermedades causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o del trabajo que realice el obrero o el empleado y que le produzcan incapacidad.

En el caso de enfermedad profesional se reputa responsable de ella al patrón en cuyo servicio el obrero se incapacite para el trabajo, a menos que pruebe que la víctima padecía de la enfermedad antes de entrar a su servicio; presumiéndose, por otra parte, que la enfermedad profesional ha sido producida por el género de trabajo

ejecutado por la víctima durante los dos años anteriores a la aparición de la enfermedad, y debiendo, en todo caso, atenderse al grado de incapacidad que la víctima presente. Así aparece establecido en el N° 4 del artículo 6° del Reglamento N° 238, de 31 de marzo de 1925, y en el artículo 2° del Reglamento N° 581, de 21 de abril de 1927, sustituido por el Decreto N° 389, de 18 de junio de 1948, relativos a la materia.

Por su parte, el artículo 4° del aludido Reglamento N° 581, sustituido también por el Decreto N° 389 ya mencionado, dispone que, por regla general, la indemnización se exigirá al patrón o empleador que ocupó a

**la víctima durante el lapso de dos años anteriores a la aparición de la enfermedad, a menos que pruebe que la enfermedad fue contraída al servicio de otros patrones o empleadores, casos en los cuales éstos serán responsables.**

### **Sentencia de Primera Instancia**

Concepción, siete de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve.

Vistos:

Don Andrés Pinto Cornejo, obrero, de este domicilio, calle O'Higgins 476, Oficina 104, demanda a fojas 1 a don Ignacio Ureta, ingeniero, domiciliado en calle Nonguén 1149 de esta ciudad, y dando los fundamentos de la demanda, dice:

Que trabajó al servicio del demandado por el lapso de ocho años, más o menos, desde 1949 hasta el 31 de diciembre de 1957, como mayordomo en las faenas de descarga de carbón, sílice y otras sustancias minerales, en el muelle de la Compañía de Acero del Pacífico. Con motivo de su trabajo, contrajo la enfermedad profesional denominada silicosis, la que se encuentra en la tercera fase, y le produce hasta el 90% de incapacidad permanente para el trabajo. Esta enfermedad profesional lo faculta para solicitar del demandado se le pague una indemnización

que se ajuste al grado de su incapacidad, en relación con el salario que legalmente debe tomarse en consideración para ello, haciendo presente que últimamente y durante el año 1957 devengó un salario de \$ 54.500 mensuales. En consecuencia, solicita se acoja su demanda, y en definitiva se condene al demandado al pago de la indemnización que le corresponde, conforme a las disposiciones 254, 271, 275, 279 y demás que sean pertinentes del Código del Trabajo, fijándose su monto.

Contestando el demandado a fojas 8, dice:

Que pide se deseche la demanda, con costas, por carecer de base legal la petición del demandante, y al mismo tiempo, por existir imposibilidad material, física y científica para contraer la silicosis durante el desempeño de las faenas, mientras trabajó con el compareciente. En efecto, el señor Pinto trabajó primero de jornalero en la labor de descarga de barcos en el muelle de Huachipato, y desde 1952 se desempeñó como capataz. Las materias primas descargadas por el compareciente para Huachipato fueron carbón, hierro, caliza o carbonato de calcio, y esporádicamente manganeso y dolomita, y ninguno de estos productos tiene como base el sílice, único elemento que podría acarrear la enfermedad profesional que se invoca. Aún en el supuesto que por circunstancias anti-naturales hubiera existido al-

**ENFERMEDAD PROFESIONAL**

**285**

gún residuo de sílice en las faenas o en los barcos, sería también imposible que el actor haya contraído silicosis en el desempeño de sus funciones, ya que mientras operó como jornalero estuvo la mayor parte del tiempo en faenas de muelle y cubierta, debido a su excesiva gordura, pues debe pesar unos 140 ó 150 kilos. Más aún, en 1954 fue sometido a una intervención quirúrgica y a un reposo superior a un año debido a que presentó fallas orgánicas en ambas rodillas, y por ello se hizo imposible cualquiera intervención en el interior de los barcos. Por otra parte, por las buenas condiciones profesionales del señor Pinto, trabajó como capataz a cargo de importantes faenas de dirección y movimiento de plumas y palas mecánicas, siempre en la cubierta de los barcos o encima del muelle, lo que permite alejar cualquier sospecha remota o idea de que hubiera existido en el lugar de sus faenas una atmósfera dañina y recargada de sílice, como se pretende en la demanda. Este pleito carece de toda base legal, pues el demandante no ha acompañado ningún antecedente técnico o sanitario que permita suponerlo enfermo de silicosis. Si presenta una insuficiencia respiratoria, bien pudiera tener ella como base un asma crónica, un enfisema, una bronquitis, una tuberculosis o una afección cardíaca.

Llamadas las partes a un avenimiento, no se produjo.

A fojas 8 vuelta se recibió la causa a prueba, rindiéndose por las partes la documental y testimonial que rola en autos.

Se declaró cerrado el proceso.

Con lo relacionado y considerando:

1º—Que el demandante fundamenta la demanda en el hecho de haber trabajado al servicio del demandado durante ocho años, desde 1949 hasta el 31 de diciembre de 1957, como mayordomo en la descarga de carbón, sílice y otras sustancias minerales en el muelle de la Compañía de Acero del Pacífico, y haber contraído con motivo de su trabajo la enfermedad profesional denominada silicosis, la que le produce una incapacidad para el trabajo hasta el 90% de su capacidad general;

2º—Que el demandado niega en el comparendo la posibilidad de que el actor haya contraído en el desempeño de sus funciones la silicosis, por cuanto primero trabajó como jornalero en la descarga de barcos en el muelle de Huachipato, y desde 1952 como capataz, y las materias primas descargadas fueron carbón, hierro, caliza o carbonato de cal y a veces también manganeso y dolomita, y ninguno de esos productos tiene como base el sílice, único elemento que pudiera haber producido la enfermedad profesional que invoca el dependiente, y por

las demás razones que da en su contestación;

3º—Que no ha habido controversia entre las partes en cuanto al hecho de haber trabajado el demandante al servicio del señor Ignacio Ureta en el muelle de Huachipato, en la descarga de carbón y otras sustancias minerales, durante el tiempo de ocho años más o menos, es decir, desde 1949 hasta el 31 de diciembre de 1957, salvo el lapso que niega el patrón, y sólo discrepan en cuanto al hecho de haber contratado el dependiente la enfermedad profesional que cobra, pero reconoce el demandado que las sustancias minerales con que operaba el actor eran carbón, hierro, caliza o carbonato de cal, y a veces también manganeso y dolomita, todos compuestos que contienen sílice;

4º—Que, del informe de la Comisión de Medicina Preventiva, de fojas 13, aparece que el demandante padece actualmente de dolor de espalda, tos con expectoración y disnea de esfuerzo; que, según la radiografía de 26 de diciembre de 1957, se aprecian en el paciente imágenes micronodulares de pequeño y gran tamaño en ambos campos pulmonares; y que, según el diagnóstico de dicha Comisión, el dependiente padece de silicosis pulmonar en su segunda fase, la que le produce una incapacidad permanente parcial para el trabajo del 50% de su incapacidad general, se-

gún examen practicado el 8 de diciembre último;

5º—Que de la contestación a la demanda, de la declaración de los testigos del demandado, René Ripley Díaz y Héctor Valenzuela Pérez, a fojas 9 y 9 vuelta, documento de fojas 11 e Informe del Servicio Nacional de Salud de fojas 16, se desprende claramente que el demandante trabajó durante el tiempo servido al señor Ureta en un ambiente contaminado con polvo de carbón, sílice y otras sustancias minerales en mayor o menor proporción, por lo que es evidente que esas concentraciones de polvo ambiental han producido a la víctima la enfermedad profesional de que padece, silicosis o silico-antracosis, o al menos han contribuido a agravar un proceso ya iniciado.

Si bien en el Informe de fojas 16 se hace presente que la exposición de los obreros a tales ambientes es muy breve e intermitente, debido al carácter de esas faenas, y que la posibilidad de contraer la silicosis en tales condiciones es prácticamente insignificante, y en todo caso, no antes de un período de exposición inferior a quince años, se omite en el Informe hacer presente que todo es relativo, y que influyen también poderosamente en el proceso patológico de la enfermedad profesional que nos ocupa, la constitución física del sujeto y el tamaño de las partículas de polvo ambiental, pudiendo también contraerse per-



**ENFERMEDAD PROFESIONAL**

**287**

fectamente una silicosis o silico-antracosis, conforme a esos antecedentes, en un lapso inferior a cinco años;

6°—Que, según lo dispone el artículo 258 del Código del Trabajo, la responsabilidad del patrón se extiende a las enfermedades causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o trabajo que realiza el dependiente y que le produzcan incapacidad. Conforme al N° 4 del artículo 6° del Reglamento N° 238, de 31 de marzo de 1925, en el caso de enfermedad profesional se reputa responsable al patrón en cuyo servicio el obrero se incapacite para el trabajo, a menos que pruebe que la víctima padecía de la enfermedad antes de entrar a su servicio. Y conforme al artículo 2° del Reglamento N° 581, substituído por el Decreto N° 389, de 18 de junio de 1948, se presume que la enfermedad profesional ha sido producida por el género de trabajo ejecutado por la víctima durante los dos años anteriores a la aparición de la enfermedad, debiendo, sin embargo, atenderse, en todo caso, al grado de incapacidad que la víctima presente. Y agrega el artículo 4° del mismo Reglamento, substituído también por el Decreto N° 389 citado, que, por regla general, la indemnización se exigirá al patrón o empleador que ocupó a la víctima durante el lapso a que se refiere el artículo 2°, a menos que pruebe que la enfermedad fue contraída al servicio de otros patrones o

empleadores, casos en los cuales éstos serán responsables;

7°—Que, como se ve, dentro de esta ritualidad a que se sujetan las indemnizaciones de las enfermedades profesionales, no hay cabida para desestimar el cobro en el caso de autos, por cuanto la indemnización se exige al patrón o empleador que ocupó a la víctima durante los dos años anteriores a la aparición de la enfermedad, a menos que pruebe que la enfermedad fue contraída al servicio de otros patrones o empleadores, lo que no ha ocurrido en el caso de autos, y ni aún se ha invocado tal circunstancia. Por el contrario, de la propia contestación a la demanda, del documento de fojas 11 y del Informe médico de fojas 16 aparece que el dependiente trabajaba en un ambiente que contenía polvo propicio a la enfermedad, en mayor o menor proporción. Por lo demás, es un hecho del proceso no contradicho, que el demandante trabajó al señor Ureta desde 1949 hasta diciembre de 1957, salvo el lapso que se niega, y que a la fecha padece una silicosis en su segunda fase, la que le produce una incapacidad del 50% para el trabajo, y es inverosímil y contrario al buen sentido, estimar que si el paciente hubiera estado enfermo de silicosis antes de servir al demandado, sólo ahora se manifestara la enfermedad en tal proporción que lo incapacita en alto grado para el desempeño de su trabajo, antecedentes, éstos suficientes

para desechar la tesis patronal, de que a su servicio no contrajo la silicosis que se invoca;

8°—Que, de consiguiente, en virtud de lo expuesto en los considerandos anteriores, y, en especial, atendiendo al mérito del Informe de la Comisión de Medicina Preventiva, corriente a fojas 13, el Tribunal estima equitativo fijar la incapacidad que produce al dependiente la silicosis pulmonar en el 50% de su capacidad general de trabajo;

9°—Que del Informe de la Inspección Provincial del Trabajo de fojas 5, no objetado, aparece que el demandante devengó en los últimos doce meses servidos la suma de \$ 743.468 por concepto de salarios, es decir, una remuneración superior al sueldo vital anual fijado para el respectivo departamento, cantidad que, en virtud del artículo 265 del Código del Ramo, para los efectos de las indemnizaciones de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no podrá ser considerada superior al sueldo vital anual vigente en la época y en el lugar del accidente, o en que se contrajo la enfermedad profesional, salvo que se haya convenido otra cosa por las partes, lo que no parece haber ocurrido en el caso de autos.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 254, 255, 258, 261, 262, 263, 265, 271, 275, 276, 277, 279, 497, 538 y 540 del Código del Trabajo; 2° y 4° del Reglamento N° 581, de 21 de

abril de 1927, substituídos ambos por el artículo 1° del Decreto N° 389, de 18 de junio de 1948; 1°, 2°, 3° y 9° del Decreto N° 8, de 24 de enero de 1946, se declara:

1) Que ha lugar a la demanda de fojas 1, sólo en cuanto el demandado debe pagar al actor el sueldo vital anual de 1947, fijado para los empleados particulares del departamento de Talcahuano, en doce cuotas iguales y vencidas de un sueldo vital mensual cada una, por concepto de la indemnización de la enfermedad profesional que se cobra;

2) Que, para responder al pago total y regular de las cuotas ordenadas pagar en el número anterior, el demandado deberá rendir caución suficiente ante la Caja de Accidentes del Trabajo, dentro de décimo día, y en caso no lo hiciere, deberá depositar el total de la indemnización en la cuenta del Tribunal;

3) Que cada parte pagará sus costas y por mitad las comunes.

Se regulan los honorarios del Abogado del demandante en el ocho por ciento de lo que se ha ordenado pagar.

Anótese y archívese oportunamente.

E. Crisosto B.

Dictada por el señor Juez Titular del Trabajo, don Esteban

**ENFERMEDAD PROFESIONAL**

**289**

Crisosto Bustos — Lidia Schiaffino de Salazar, Secretaria Subrogante.

**Sentencia de Segunda Instancia**

Concepción, tres de abril de mil novecientos cincuenta y nueve.

Vistos:

De conformidad, también, con lo prescrito en los artículos 499 y 565 del Código del Trabajo, se confirma la sentencia apelada de siete de marzo último, escrita a fojas 18.

Devuélvanse.

Luis Aguayo A. — A. Spottke S. — M. Cresta S.

Pronunciada por la Ilustrísima Corte del Trabajo, integrada por su Presidente, don Luis Aguayo Avello y Ministros titulares, don Agustín Spottke Solís y don Marcelo Cresta Salomone. Brunilda Alvarez Hauenstein, Secretaria.

En contra de la sentencia de la Ilustrísima Corte del Trabajo de Concepción, precedentemente transcrita, se dedujo

por la parte de don Ignacio Ureta Espiñeira recurso de queja, recurso que fue desechado por la Excelentísima Corte Suprema mediante el fallo que a continuación insertamos:

**Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema**

Santiago, primero de junio de mil novecientos cincuenta y nueve.

Por no existir falta o abuso, se declara que no ha lugar al recurso de queja interpuesto a fojas 7 por don Humberto Contreras, en representación de don Ignacio Ureta Espiñeira.

Anótese, transcribese y archívese.

Pedro Silva F. — Osvaldo Illanes B. — Manuel Montero M. — Ramiro Méndez B. — Emilio Poblete P. — Miguel Barros. — Marcos Silva B.

Pronunciada por los señores Ministros en propiedad de la Excelentísima Corte, don Pedro Silva Fernández, don Osvaldo Illanes Benítez, don Manuel Montero Moreno, don Ramiro Méndez Brañas, don Emilio Poblete Poblete y don Miguel Barros de la Barra, y Abogado integrante don Marcos Silva Bascuñán. — Aníbal Muñoz Arán, Secretario.